

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTE	Flor Elba Zuluaga Ramírez
DEMANDADO	Colpensiones y Juntas Nacional y Regional de Calificación de Invalidez
PROCEDENCIA	Juzgado 19 Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 3105 019 2019 00043 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 024 de 2023
TEMAS Y SUBTEMAS	Pensión de invalidez de origen común – no acredita PCL igual o superior a 50%
DECISIÓN	Confirma sentencia absolutoria

En la fecha, **veintiocho (28) de marzo de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez, Claudia Angélica Martínez Castillo, y Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento con relación al recurso de apelación interpuesto por el apoderado de **Flor Elba Zuluaga Ramírez**, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario que promoviera en contra de **Colpensiones y la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez**. Radicado único nacional 05001 3105 **019 2019 00043** 01.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de las restantes integrantes el proyecto, estudiado, discutido y aprobado mediante acta **Nº 004**, que se adopta como sentencia y se plasma a continuación:

Antecedentes

La demandante convocó a juicio a las accionadas pretendiendo se declare la nulidad de los dictámenes emitidos por Colpensiones y la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez; en consecuencia, se establezca que cuenta con una PCL del 50% de origen común, estructurada el 16 de mayo de 2016, condenándose a Colpensiones a reconocerle y pagarle pensión de invalidez, incluidas las mesadas adicionales, intereses moratorios e indexación, y costas del proceso.

En sustento de ello afirma que, fue calificada por Colpensiones el 2 de julio de 2016 con una PCL del 34,79% de origen común estructurada el 22 de junio de 2016, decisión con la que no estuvo de acuerdo y en razón a ello fue evaluada por la Junta Regional de Calificación el 9 de noviembre de 2016, confirmando la fecha de estructuración y reduciendo a 33,10% la PCL, experticia que ante la interposición de recurso fue conocida por la Junta Nacional de Calificación el 25 de julio de 2017, ratificando lo expuesto por la Junta Regional. Afirma que fue calificada el 8 de noviembre de 2018, por la IPS Universitaria, quien le estableció una PCL del 56,06% estructurada el 16 de mayo de 2016, de origen común; que en los 3 años anteriores a esta data acredita más de 50 semanas de cotización; que el 19 de diciembre de 2018, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión sin obtener respuesta a la fecha de presentación de la demanda.

En auto del **30 de enero de 2019 se admitió** y ordenó dar trámite a la acción, una vez enteradas las demandadas de la existencia del proceso, procedieron a allegar contestación, así:

Colpensiones, admite, de conformidad con las pruebas obrantes, las calificaciones de PCL realizadas a la actora por la entidad, Junta Regional

y Junta Nacional de Calificación de Invalidez y la IPS Universitaria; con relación a los demás supuestos de hecho, no le constan o no son hechos. **Resistió las pretensiones**, al no existir soporte fáctico ni jurídico para acceder a la prestación. Formuló excepciones de mérito tendientes a enervar las peticiones, tales como, inexistencia de la obligación demandada y falta de derecho para pedir, buena fe, prescripción, innominada o genérica, imposibilidad de condena en costas,

Junta Regional de Calificación de Invalidez, rechazó las pretensiones, al ajustarse el dictamen emitido de manera estricta y objetiva al Manual Único de Calificación de Invalidez, así como tener sustento fáctico en los antecedentes médicos y clínicos aportados por la parte. Frente a los hechos acepta solo lo relativo al experticio rendido por la entidad, los demás supuestos no le constan. Por último, presenta **las excepciones** de inexistencia de fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones.

La Junta Nacional de Calificación de Invalidez, acepta el contenido de los dictámenes emitidos por Colpensiones, la Junta Regional y la Nacional, los demás supuestos no son ciertos o no le constan, indicando que no es posible otorgarle valor probatorio al dictamen que se realizó la actora de manera particular, debiéndose citar al profesional para su contradicción. Con relación a las pretensiones manifestó que se atenía a lo que resulte probado, aclarando que la decisión emitida por la entidad tiene sustento legal y probatorio. Finalmente, presentó las excepciones de mérito de: legalidad de la calificación emitida por la junta nacional de calificación de invalidez, inexistencia de prueba idónea para controvertir el dictamen – carga de la prueba a cargo del contradictor, la variación clínica de la condición del paciente con posterioridad al dictamen de la Junta Nacional exime de responsabilidad a la entidad, improcedencia de las pretensiones respecto a la Junta Nacional, buena fe y, la genérica.

La primera instancia **terminó con sentencia** proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, en la que absolvió a las demandas de las pretensiones incoadas en su contra. Declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación demandada y falta de derecho para pedir e impuso costas a cargo de la actora, fijando el monto de las agencias en derecho.

Argumentó el juzgador, después de analizar sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sobre la procedencia de la controversia de los dictámenes emitidos por las Juntas, así como las historias clínicas obrantes en el plenario concatenadas con el manual único de calificación de invalidez y los dictámenes aportados, que si bien la paciente presenta fibromialgia y trastorno depresivo, enfermedades importantes que afectan su desempeño, también lo es, que le es posible desarrollar actividades con ayuda o apoyo, supuesto que no la ubica en la calificación del 20% establecida en el peritazgo aportado, adicional a que este en la parte económica, realiza inferencias contrarias a los argumentos que se deben considerar para su autosuficiencia, no siendo procedente acogerlo, dadas sus incongruencias, y con ello tener a la actora con una PCL superior al 50%.

Inconforme con la anterior decisión **la parte demandante interpuso recurso de apelación**, solicitando su revocatoria y, con ello, el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez desde el 16 de mayo de 2016, o en su defecto desde la fecha en que se reduzca su capacidad laboral residual al ser su enfermedad de tipo degenerativa, para esto, en síntesis, solicita se tenga en cuenta el dictamen aportado, en tanto, las apreciaciones expuestas por el despacho a fin de restarle valor al mismo, carecen de fundamento al evidenciarse en la historia clínica que el episodios trastorno depresivo recurrente tiene una duración superior a los dos años, sumado a que cuenta con más de cinco de los criterios

enlistados en el capítulo 13.4.2 del Decreto 1507, que hace referencia a los trastornos del humor, siendo procedente asignarle, como lo hizo la IPS universitaria una clase III, y tenerle la PCL superior al 50%, contando, por demás, con las semanas para acceder a la prestación.

Del dictamen rendido por el Ces, se corrió traslado a las partes, así como para que presentaran alegatos de conclusión, haciendo uso de dichos términos:

La **demandante**, solicitando acoger el dictamen aportado y no el emitido por el CES, al ir en contravía de la convención de los derechos de las personas con discapacidad - la Constitución Política y el bloque de constitucionalidad- aprobada a través de la Ley 1346 de 2009, por lo que el Estado debe reconocer las barreras con las que cuenta, en tanto, su limitante no es su condición física sino el entorno social que sufre, supuesto que también se encuentra plasmado en la SL1171-2022.

Esgrime que la experticia desconoce el contenido de la historia clínica, los años de evolución de la patología e infavorable rol laboral, circunstancias que la limitan e imponen barreras para desplegar una actividad laboral.

Colpensiones, después de transcribir el contenido del artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por artículo 42 del Decreto 19 de 2012, y el artículo 44 del Decreto 1352 de 2013, pide que no se acceda a las pretensiones de la demanda.

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones

Como hechos debidamente acreditados en los autos, no discutidos y que se tornan relevantes para resolver se tienen: que Elba Zuluaga fue calificada por Colpensiones el **02 de julio de 2016**, con una **pérdida de capacidad laboral del 34,79% estructurada el 22 de junio de 2016**, decisión frente a la cual se mostró en desacuerdo y por ello, el 09 de noviembre de 2019, fue valorada por la **Junta Regional de Calificación de Invalidez**, quien le determinó una **PCL 33,10% estructurada el 22 de junio de 2016**, por los diagnósticos de trastorno depresivo y fibromialgia con trastorno somatomorfo, presentando frente a dicha experticia recurso de apelación, siendo desatado por la **Junta Nacional de Calificación de Invalidez, 25 de julio de 2017, confirmando la decisión objeto de revisión**. Al trámite se allegó **experticia del 08 de noviembre de 2018, rendida por la IPS Universitaria**, quien estableció que la señora Elba presenta una **PCL del 56,60% estructurada el 16 de mayo de 2016**, por los diagnósticos de mialgia y trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente. **De manera oficiosa esta Sala dispuso la valoración de la señora Elba Zuluaga, por parte del CENDES, entidad que estableció que presenta una PCL del 34,6% estructurada el 20 de enero de 2023,** data en la que fue evaluada por el medico calificador. Considerándose como diagnósticos "*Trastorno por Depresión. Clase 2*".

Conforme a lo anterior, **el problema jurídico** se circunscribe a establecer la eficacia probatoria del dictamen aportado con la demanda, respecto a los practicados por Colpensiones, la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez y el decretado de manera oficiosa, a fin de determinar si a la demandante, le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.

Pues bien, debe decirse que la Corte Constitucional, entre otras, en la Sentencia T-873 de 2013 ha considerado la calificación de la pérdida de capacidad laboral como un derecho que tiene toda persona, el cual cobra gran importancia al ser el medio para la realización efectiva de otras garantías fundamentales como la salud, la seguridad social y el mínimo vital, en tanto que permite determinar a qué tipo de prestaciones tiene derecho el afectado por una enfermedad o accidente, producido con ocasión o como consecuencia de la actividad laboral, o por causas de origen común.

Así, atendiendo la Jurisprudencia Constitucional, la calificación de la pérdida de capacidad laboral debe considerar las condiciones específicas de cada persona, valoradas sistemáticamente, dicha valoración puede tener lugar no solo como consecuencia directa de una enfermedad o accidente de trabajo, claramente identificado, sino también, de patologías que resulten de la evolución posterior de esta enfermedad o accidente, o, a su vez, por una situación de salud, inclusive de origen común.

De la misma manera dicha corporación ha establecido reglas procedimentales básicas que rigen las actuaciones de las entidades encargadas de calificar la pérdida de capacidad laboral, y que conforman los contenidos mínimos del derecho fundamental al debido proceso en esta clase de trámites, encontrándose dentro de ellas: "ij) **La valoración del estado de salud de la persona calificada debe ser completa e integral, pues las juntas deberán proceder a realizar el examen físico correspondiente, y al sustanciar y proferir el respectivo dictamen *deben tener en cuenta todos los aspectos médicos consignados en la historia clínica y ocupacional del paciente***"(sentencia T 713 de 2014 y T 093 de 2016).

El artículo 41 de la Ley 100 de 1993, determina que son las Juntas de Calificación de Invalidez, junto con Colpensiones, las EPS, las ARL y las compañías de seguros que asuman los riesgos de invalidez y muerte, las entidades responsables de establecer, con fundamento en criterios técnicos, médicos y científicos, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, el origen de la misma y su fecha de estructuración. No obstante, lo establecido en esta disposición legal, ninguna duda queda que tales dictámenes pueden ser debatidos judicialmente, en tanto, es posible que dentro de un trámite ante la justicia ordinaria se puedan acreditar los errores en que pudo haber incurrido una pericia, por cualquier medio probatorio, atendiendo que, en los juicios laborales, al tenor del artículo 51 del C.P.T., son admisibles todos los medios de prueba establecidos por la Ley. De acuerdo con ello, las partes tienen libertad en esta materia, pudiendo acreditar sus sustentos fácticos por el que les resulte más apropiado, teniendo como único límite los criterios de utilidad, conducencia y pertinencia.

Así, al haberse presentado inconformidad por la parte demandante frente a la decisión emitida, y exponiendo argumentos que se encuentran acorde con lo establecido por la Jurisprudencia tanto de la Corte Suprema Sala de Casación Laboral, como la Constitucional, esta Sala procedió a decretar nueva prueba de oficio, para la calificación integral de la demandante, la misma fue rendida por el Cendes, quien como ya se dijo en dictamen **estableció que la actora presenta una PCL del 34,6% estructurada el 20 de enero de 2023,** data en la que fue evaluada por el medico calificador. Valorándosele el diagnostico de "*Trastorno por Depresión. Clase 2*". y teniendo en cuenta para ello, examen médico general, físico, osteomuscular, de columna, extremidades, piel, neurológico, así como una evaluación de su estado mental, dejándose consignado como conclusión "*La trabajadora Flor Elba Zuluaga Ramírez de 55 años, quien padece de una enfermedad osteomuscular desde hace 7 años, con*

diagnóstico de Fibromialgia y de acuerdo al seguimiento, Psiquiatría considera que el dolor continuo le ha generado una afectación de la esfera mental, definida como una depresión mayor, para la que ha estado en tratamiento hasta el año 2021, en que con la Pandemia de Covid 19 dejó de consultar, por el temor de contagiarse y morir. Fue reintegrada a su trabajo en 07-2021 y se reubicó como Empacadora por su condición de salud, en la cual se desempeña sin restricciones. Hasta la fecha no ha retomado los controles de su patología de base por la EPS. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1507 de 2014, la Fibromialgia se considera dentro de la clasificación como Primaria, ya que No se presentan otras afecciones que permitan explicar los síntomas, por lo cual se califica en el capítulo de deficiencias como enfermedad mental tipo depresión mayor. Su patología depresiva lleva 6 años de diagnosticada, con criterios de depresión mayor y actualmente con remisión parcial de los síntomas, lo cual se evidencia en la evaluación realizada y su evolución, considerando que se Clasifica actualmente en Clase II, que corresponde a la Clase en la cual todas las entidades de la Seguridad Social la han clasificado. En cuanto al Rol Laboral, se califica con un 10% de pérdida de la capacidad laboral y ocupacional, ya que se encuentra realizando las actividades donde se encuentra reubicada.”

Calificación, que se encuentra acorde a las deficiencias baremadas, ofreciendo plena credibilidad a la Sala, y que en lugar de desvirtuar confirma las atacadas, realizadas por Colpensiones y por la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, valorándose de manera directa a la actora, sin que sea posible modificar ninguno de los aspectos, no solo por carecer los juzgadores de los conocimientos técnicos para hacerlo, sino porque la jurisprudencia especializada es clara en indicar que:

si en un proceso se encuentran enfrentados dos dictámenes, uno de la Junta Regional y otro de la Nacional, el juez del Trabajo y de la Seguridad Social, en virtud de la libertad probatoria prevista por el artículo 61 del CPTSS, está facultado para escoger lo establecido en el primero o en el segundo, e inclusive ordenar un tercero, pero el que acoja debe tomarlo en su integridad, esto es, no puede escindirlo y menos configurar uno nuevo con apartes de uno y otros, así se explica en sentencia SL1021 – 2019 radicado 62309 del 27 de marzo de 2019

Así las cosas, al ser los medios de convicción anotados los idóneos para determinar tanto el grado de pérdida de la capacidad laboral como la fecha de estructuración de la misma, y en especial el del Cendes, al haber sido emitidos por organismos especializados en el tema y autorizados por el legislador, así como convalidar el experticio rendido por las entidades autorizadas por la ley para emitir los mismos, se tienen como invariables, pues, dichos conocimientos técnicos y científicos tienen que ser refutados por un medio igual, al carecer el operador judicial de ellos (ver sentencia SL1021-2019), y al desvirtuar estos las conclusiones del dictamen de parte, de manera objetiva y atendiendo los diagnósticos, historias y valoración de la actora, **lo procedente es la confirmación de la decisión revisada.**

Costas en esta instancia a cargo de la actora a quien se desata adversamente el recurso. Inclúyanse como agencias en derecho la suma de \$580.000.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **confirma** la sentencia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de esta ciudad dentro del proceso ordinario promovido por señora **Flor Elba Zuluaga Ramírez**, contra **Colpensiones y la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez.**

Costas en esta instancia a cargo de la actora a quien se desata adversamente el recurso. Inclúyanse como agencias en derecho la suma de \$580.000,00.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO**, que se fijara por **secretaría por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto

por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Los magistrados (firmas escaneadas)



LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO